

H u m a n i d a d

Revista Electrónica de Estudios Humanísticos

Universidad Luterana Salvadoreña

No. 5 Julio - Diciembre de 2021

Editorial

La nueva era política en El Salvador y los desafíos del gobierno de Nayib Bukele

Waldemar Urquiza

Filósofo y cientista social

Universidad Luterana Salvadoreña

Obviamente, el gobierno de Bukele no amenaza con causar rupturas esenciales al sistema económico nacional, en mucho de corte capitalista, al menos en cuanto no se saldrá de él, si bien desde la adopción del bitcoin como moneda de curso legal empezó a provocar resquemores en los grupos tradicionales - sobre todo a nivel internacional- y más todavía con el anuncio de la bitcoin city, lo cual hace suponer que podría servirse de esta moneda para los eventuales proyectos de desarrollo, acercándose con ello a otros grupos emergentes que se perfilan como la nueva competencia en los mercados globales del dinero. De este modo, la disputa que generaría no sería entre dos fuerzas externas y tan ajenas entre sí sino internas al modelo.

Lo que sí está más claro es que inaugura una nueva era política en El Salvador, desde luego, su marcha es imperfecta, pero con mucho potencial de cambio, que habrá que ir puliendo a fuerza de apoyo, crítica constructiva y propuestas para que los resultados lleguen a ser provechosos para la sociedad. Esta era puede caracterizarse por una nueva forma de gobernar y de hacer política, no apegada a las costumbres tradicionales locales ni a patrones de la teoría política clásica. Pero, lejos de toda duda, orientada a favorecer los intereses de la mayoría de la población, con especial énfasis en los sectores tradicionalmente menos favorecidos, realizando al mismo tiempo la limpieza de la corrupción que por la necesidad urgente de eliminarla se ha llevado a cabo con métodos pragmáticos, los cuales si bien no guardan la pureza de una visión conservadora sí tienen suficiente base legal; asegurando efectivamente terminar con la gobernabilidad comprada con maletines negros, sobresueldos y otras prebendas, poniendo fin al mismo tiempo al control del Estado por parte de las élites económicas y en alguna medida también de la embajada estadounidense y mostrando la buena intención de crear las condiciones para un desarrollo económico incluyente, es decir, tomando en cuenta a las bases, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, algo inédito en la historia del país. Propósitos nada despreciables para los que nos hemos quejado de los gobiernos del pasado y queremos un renacer del país. Por supuesto, un renacer del cual Bukele con todo su esfuerzo tan solo lograría crear el germen, dejando a las futuras generaciones la responsabilidad de avanzar hacia un mayor desarrollo. Obviamente, una nueva república sobre bases sólidas no se edifica en cinco ni en diez años, es una obra de décadas. Pero este es el desafío necesario que alguien tenía que iniciar tarde o temprano para impulsar un real y sostenido despeque del país.

Ese cambio impulsado por el Ejecutivo no podía echarse a andar sin contar con la anuencia y respaldo de los otros poderes del Estado. El Ejecutivo, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, requería del acompañamiento de la Asamblea Legislativa y del Órgano Judicial. Fue así que, entendiendo la necesidad de ese cambio, la población salvadoreña dio el voto para contar con una mayoría parlamentaria favorable al Ejecutivo, con la cual juntos emprender los nuevos desafíos. La complejidad de la obra exigía políticos jóvenes, no de viejo cuño que estuvieran marcados y comprometidos con los vicios del pasado. Se trataba de alcanzar una sintonía que evitara las discusiones estériles, oponerse por oponerse, solo para dejar la impresión de una independencia de poderes, a todas luces mal entendida, que no sirve más que de obstáculo para los buenos propósitos.

En efecto, la nueva mayoría parlamentaria, del partido Nuevas Ideas, apoyada por el partido GANA y diputados del PDC y del PCN, desde sus inicios ha emprendido una diversidad de acciones coherentes con los intereses de la mayoría de la población, primeramente, quitando las trabas que había enfrentado el nuevo proyecto político iniciado por el Ejecutivo, justo lo que se hizo con la cesación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República. En seguida, apoyando los programas del Ejecutivo, buenos para la mayoría de la población y percibidos como tal por la misma. Otras acciones emprendidas son la investigación de las plazas fantasmas al interior de la Asamblea Legislativa que representaban un agujero negro por donde se esfumaba una importante suma de dinero de los fondos públicos sin producir ninguna utilidad para el país. También realizando la investigación sobre el destino de millones de dólares aprobados por las legislaturas anteriores a ONGs de dudosa naturaleza, muchas de las cuales dirigidas por diputadas de los partidos políticos de ARENA y del FMLN, y recientemente la investigación sobre los jugosos sobresueldos otorgados a funcionarios de los tres poderes del Estado en los gobiernos de ARENA y del FMLN, no solo al margen de la ley por no contar con un respaldo legal en su calidad de sobresueldo y evadir el impuesto sobre la renta sin ninguna justificación legal válida, sino que representaban un privilegio abusivo que convirtió su función en un trabajo lucrativo, muy lejos de la vocación de servicio que se espera de todo funcionario público, impidiendo que esas millonarias sumas se destinaran a programas sociales tan necesitados por la población salvadoreña sobre todo en las áreas de la salud, educación y seguridad; razones por las cuales quienes los recibieron no solo cayeron en la ilegalidad sino que faltaron a la ética, merecedores de sanciones penales y la obligación de devolver esos dineros.

Desde luego, estas acciones eran exigidas y son bien vistas por la mayoría de la población, pero, como era de esperarse, rechazadas y denigradas por los individuos y grupos que se habían beneficiado de la corrupción, resultando curioso que lo hiciera también la administración estadounidense y otros países de la comunidad internacional, pese a que en reiteradas ocasiones hubiesen señalado que en los gobiernos anteriores galopaba la corrupción, negándose a aceptar que lo hecho no solo era legal sino necesario para iniciar la limpieza de la corrupción, acusando a Bukele de dictador y de violentar la independencia de poderes. Era obvio que la independencia de poderes nunca había existido en el país, ya que las decisiones que se tomaban se negociaban con maletines negros, sobresueldos y otras prebendas. Por tanto, que la aparente gobernabilidad que se miraba no era auténtica. De hecho, Rubén Zamora, uno de los exfuncionarios que rotó en altos cargos públicos en algunos de tales gobiernos, lo dijo de la forma más elocuente y descarada: “Los sobresueldos eran un instrumento del gobierno para gobernar”, lo que literalmente se ha de entender que la gobernabilidad que se tuvo fue comprada o quizá mejor dicho sobornada. Una práctica política que no solo alcanzaba a funcionarios de los tres órganos del Estado sino a dirigentes de fundaciones que realizaban “investigación”, medios de comunicación, analistas políticos, periodistas y grandes empresarios. Tejiendo una red mafiosa perfectamente orquestada. Todo a espaldas del pueblo, si bien de sobra conocido por la misma población, ya que era un mal que nada podía ocultarlo. Afortunadamente, hoy que nuevas personalidades llegan a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y

a la Fiscalía es que se desempolvan las pruebas y se sacan a la luz. Podemos estimar que los miles de millones de dólares desfalcados de las arcas del Estado por los gobiernos de ARENA y del FMLN cayeron en manos de no menos de mil personas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes y hacer no solo que devuelvan lo robado, sino que paguen con cárcel para sentar un precedente y enviar el mensaje correcto a los presentes y futuros funcionarios públicos y devolver la credibilidad en ellos de parte de la población. Sin más, esta es una tarea ética y jurídica que las generaciones de nuevos políticos están obligadas a hacer.

Desafíos

Teniendo en cuenta esos hechos, lo que toca de cara al futuro son los siguientes desafíos:

1. Completar las fases del Plan Control Territorial, las cuales siguen un curso exitoso, permitiendo la efectiva reducción de los homicidios, extorsiones y secuestros; lo mismo, la implementación de programas que permitan el abandono de los grupos delictivos, la reinserción y la prevención y la recuperación de los territorios controlados por las pandillas. Devolviendo la seguridad y la libertad de movimiento a los salvadoreños.
2. Fortalecer el sistema de salud pública, procurando en lo inmediato reducir en lo posible el impacto de la covid-19 y de otras enfermedades endémicas, respecto de lo cual se avanza notablemente, aunque todavía falta mucho por hacer. Es preciso mejorar y ampliar la infraestructura, especializar al personal de salud, abastecer de equipo y medicamentos y establecer programas sostenidos orientados a la prevención de enfermedades, mediante el cuidado de la salud en la alimentación, higiene y el ejercicio.
3. Reactivar la economía, atrayendo a grandes inversores extranjeros, pero al mismo tiempo apoyando significativamente a las MIPYMES, ya que estas últimas sobrepasan las 600,000 unidades y generan alrededor de 900,000 puestos de trabajo, representando la mayor fuente de empleo y el principal motor de la economía nacional; esto no solo para paliar los efectos provocados en ellas por la pandemia sino con miras a su desarrollo. Lo mismo también el apoyo al sector agrícola y pecuario a fin de aumentar la producción nacional con miras a avanzar en la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, los fondos destinados a tales propósitos, sin duda alguna, auguran buenos resultados.
4. Desarrollo de la infraestructura vial, terrestre, marítima y aérea, como una condición necesaria para favorecer la reactivación económica. El mejoramiento del estado de las carreteras, la pavimentación de otras, la construcción de puentes y la ampliación del puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional Mons. Óscar Arnulfo Romero, más todos los proyectos viales proyectados en la Zona Oriental del país, entre otras obras, darán sus frutos a corto y mediano plazo.
5. Se ha de continuar avanzando en la diversificación de las fuentes energéticas, apostando cada vez más a las renovables y amigables con el medio ambiente, como las hidráulicas, solar, eólicas y geotérmicas; incluso, la obtención de biogás a partir del aprovechamiento de los desechos orgánicos. Con lo cual se logrará ir eliminando significativamente el empleo de los hidrocarburos.
6. Fortalecer la política exterior, ampliando los lazos con países que aseguren un alto nivel de intercambio comercial, cultural, científico y tecnológico, con miras a favorecer la modernización y el desarrollo de El Salvador, lo que incluye principalmente a las tres potencias más grandes: Estados Unidos, China y Rusia. Pero, también se ha de buscar eliminar o reducir la tradicional dependencia política que hemos tenido, delimitando el carácter de las relaciones con USA y la comunidad internacional, orientada a recuperar la dignidad de la soberanía nacional, de modo que permita dar curso a nuestra propia visión de país que

queremos; la ayuda extranjera no puede aceptarse a cambio del sometimiento o del control. El Salvador necesita socios no amos.

7. La reforma a la Constitución es una tarea necesaria no solo para actualizar y precisar ciertos artículos sino para incluir otros referidos a aspectos de vital importancia, principalmente en lo relacionado al derecho a la vida desde la concepción, a la alimentación, salud, seguridad, al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la vivienda, al acceso a Internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a un salario justo y a una pensión digna. También es atinada la propuesta del Ejecutivo de reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, incluyendo la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias y otros, males que tanto daño han hecho al país y que han supuesto un gran obstáculo al desarrollo social y económico.

8. Si bien ha sido una buena medida aumentar el salario mínimo de modo significativo, algo que sin duda ha venido a beneficiar la economía familiar, no debe ignorarse que el ingreso de las familias que lo perciben seguirá siendo desproporcionado respecto al costo de la vida en El Salvador. Por eso, la tarea pendiente, en pro de dar un salto de mayor calidad a favor de las familias más vulnerables, impactando la reducción sostenida de la pobreza, será hacer algunos cambios al modelo económico, procurando mayor justicia y equidad en la distribución de los frutos del trabajo. Es hora de examinar seriamente el modelo económico.

9. El gobierno de Bukele debe seguir impulsando la limpieza del pasado, pero no repetir los errores. Debe estar vigilante de sus funcionarios y depurarlos a tiempo, evitando perder credibilidad y desencanto. Es preciso que comprenda que tiene que cuidar el elevado apoyo que todavía mantiene, ya que, en adelante, la población será más sensible a lo que vea, no solo porque no estará dispuesta a tolerar más de lo mismo sino porque sus sentimientos serán susceptibles a las influencias de la oposición, ocupada más en atacar los detalles que puedan generar dudas y en la manipulación.

10. Como muchos señalan, el talón de Aquiles del gobierno de Bukele es la transparencia. Obviamente, sus opositores están prestos a conocer tanto los errores o desaciertos como lo concerniente al manejo de los fondos públicos para atacarlo, pero lejos de que dar cuentas sirva para alentar las voces ruidosas contrarias, es preciso que los mismos que apoyan al gobierno conozcan el estado de las cuentas, información que incluso servirá para confrontar las acusaciones de la oposición.

Papel de la oposición

En términos generales, cabe decir que, hasta ahora, la oposición en toda su diversidad (ARENA, FMLN, ONGs, medios de comunicación y un par de universidades, entre otros) se ha mostrado ciega, al no ver lo positivo que se ha logrado hacer en medio de la crisis generada por la pandemia -lo que ha permitido que el país se mantenga de pie, sin mayores sobresaltos-, vociferando una crítica sesgada y superficial, carente de un proyecto político y económico alternativo, buscando por todos los medios hacer daño al gobierno más que aportarle. Obviamente, actúa así porque se siente derrotada, castigada por la población, con una autoestima muy baja, consciente de la pérdida de credibilidad y sintiendo la vergüenza al estar siendo puesta al descubierto en su incapacidad y corrupción a lo largo de los 30 años que gobernó. Mostrándose sin fuerza y creatividad para reinventarse y buscar dignamente el apoyo de la población, incapaz de competir con propuestas consistentes. Sus diversos actos son una respuesta desesperada de su propia impotencia y frustración.

Obviamente, en la política siempre es importante una oposición, pero ésta solo resulta útil si su desempeño es razonablemente crítico y propositivo al mismo tiempo, teniendo como centro los intereses

de país o de las mayorías y no la búsqueda desesperada por hacer quedar mal los proyectos del gobierno con el único fin de sobrevivir y el sueño de recuperar el poder.